



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03923-2009-PC/TC

AYACUCHO

AGUSTIN ROJAS MIRANDA Y OTROS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de setiembre de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Ortega Berrocal contra la resolución expedida por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró fundada la demanda de proceso de cumplimiento respecto a Agustín Rojas Miranda y de Constantino Ramírez Pérez, e improcedente la demanda de autos respecto a Raymundo Ortega Berrocal ; y,

ATENDIENDO A

1. Que habiéndose declarado fundada la demanda, en relación a los demandantes Agustín Rojas Miranda y Constantino Ramírez Pérez, la citada resolución ha pasado a la calidad de cosa juzgada, por consiguiente es materia del presente recurso sólo el extremo referido a Constantino Ramírez Pérez.
2. Que la parte demandante solicita que la demandada cumpla con acatar lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 037-94 y que, en virtud de ello, se le otorgue el pago de la bonificación especial con retroactividad al 1 de julio de 1994, más los intereses legales, deduciéndose lo pagado por la incorrecta aplicación del Decreto Supremo 019-94-PCM.
3. Que este Colegiado, en la STC 0168-2005-PC, publicada en diario oficial *El Peruano* el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado.
4. Que, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber:
a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03923-2009-PC/TC

AYACUCHO

AGUSTIN ROJAS MIRANDA Y OTROS

indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

5. Que, en el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere está sujeto a controversia e interpretaciones dispares toda vez que tiene que comprobarse fehacientemente si corresponde al grupo de servidores públicos que les alcanza el beneficio de esta bonificación.
6. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA –publicada en el diario oficial *El Peruano* el 12 de julio de 2005–, también es cierto que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban *en trámite* cuando la STC 168-2005-PC fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 07 de octubre de 2008.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

Lo que certifico



FRANCISCO MORALES BARAVIA
SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL